



Asamblea General

Distr. general
6 de junio de 2008
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

41º período de sesiones

Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008

Informe sobre la encuesta acerca de la ejecución legislativa de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)

Nota de la Secretaría*

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
IV. Requisitos y procedimientos para la ejecución de una sentencia dictada en virtud de la Convención de Nueva York	1-32	2
1. Competencia de los tribunales y otras autoridades nacionales en relación con el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales de la Convención	1-5	2
2. Procesos judiciales	6-32	3
a. Plazos para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en virtud de la Convención	6-10	3
b. Procedimientos y requisitos aplicables a una petición de ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención	11-16	4
c. Objeciones a la petición de ejecución	17-24	5
d. Apelación contra la concesión o denegación de la ejecución	25-32	6
V. Recomendaciones y conclusiones	33-45	8
Anexo		
Plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención		12

* La presentación de este documento se retrasó debido a que fue necesario celebrar consultas.



IV. Requisitos y procedimientos para la ejecución de una sentencia dictada en virtud de la Convención de Nueva York

1. Competencia de los tribunales y otras autoridades nacionales en relación con el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales de la Convención

1. Las respuestas a la pregunta sobre el tribunal o autoridad competente para pronunciarse sobre el reconocimiento y la ejecución mostraron la gran diversidad de soluciones aportadas por los legisladores en la materia. La determinación de la competencia de un tribunal o una autoridad puede ser objeto del código de procedimiento civil, un instrumento legislativo de derecho privado internacional, una ley especial relativa al poder judicial o sobre la ejecución, la ley para dar cumplimiento a la Convención o la legislación sobre el arbitraje.

2. Sólo excepcionalmente se ha designado competente una autoridad especial, tal como una institución de arbitraje, la oficina del ombudsman, la oficina de solución de controversias económicas o el comisionado de asuntos jurídicos. En la inmensa mayoría de los casos la autoridad competente era un tribunal. Los tribunales competentes para interponer una acción de petición en primera instancia, a veces sin la posibilidad de una instancia superior, abarcaban desde los tribunales municipales o de distrito de primera instancia hasta el Tribunal Supremo.

3. Se indicaron con frecuencia tres criterios por los que se regía la competencia territorial de los tribunales, a saber, el tribunal del domicilio o lugar de residencia del demandado, el tribunal correspondiente a la empresa del demandado o el tribunal de ejecución de la sentencia (o el tribunal del lugar de los bienes objeto de la sentencia). En algunos casos el demandante podía escoger libremente cualquiera de esos tribunales. Otros casos se regían por reglas supletorias. Entre otras posibilidades figuraba el tribunal escogido por las partes en su acuerdo de arbitraje. Un Estado señaló que en los casos de ejecución relativos a propiedad inmobiliaria o bienes muebles, el tribunal competente era el correspondiente al lugar en que se hallaban los bienes, mientras que en los casos de ejecución de sentencias sobre derechos monetarios, el tribunal competente era el correspondiente a la residencia permanente del deudor.

4. En algunos casos se informó de que el tribunal competente era el que tenía jurisdicción sobre la cuestión a que se refería la sentencia o el tribunal competente en el asunto de no haber sido éste objeto de un arbitraje. En una respuesta se indicó que cuando un Estado era parte en el arbitraje, el tribunal competente era el Tribunal Supremo y no el tribunal de distrito.

5. En los Estados con un sistema judicial federal, la competencia puede ser simultáneamente de nivel federal y estatal, provincial o territorial en función del objeto de la sentencia, es decir, si se trata o no de una cuestión de interés federal. Los procedimientos de ejecución en un sistema federal pueden solventarse en los tribunales federales o estatales y posteriormente ser trasladados del tribunal estatal al federal.

2. Procesos judiciales

a. Plazos para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en virtud de la Convención

6. La Convención no establece un plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de las sentencias conforme a lo dispuesto en el artículo III, según el cual se reconocerá la sentencia y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde se haya invocado la sentencia. Los Estados que respondieron a la encuesta debían formular observaciones sobre la existencia o no de un plazo para solicitar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas conforme a la Convención y, de ser así, indicar de qué plazos se trataba. Un cuadro con las respuestas proporcionadas a esa pregunta por cada Estado figura adjunto como anexo.

7. Según se informó, el plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de las sentencias se establecía en función de diversas fuentes, como la legislación de aplicación de la Convención, la ley de arbitraje, el código de procedimiento civil, el código civil o comercial, las disposiciones procesales y la ley sobre el plazo de prescripción o su equivalente. El plazo disponible puede estar establecido específicamente para pedir el reconocimiento o la ejecución de una sentencia en virtud de la Convención o ser una norma general aplicable a todos los procedimientos judiciales.

8. Numerosos Estados respondieron que no existía un plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en virtud de la Convención. Otros Estados distinguieron entre una petición de reconocimiento y de ejecución, sin establecer un plazo para solicitar el reconocimiento de una sentencia, si bien la ejecución era objeto de un plazo. Cuando existía un plazo determinado para pedir la ejecución, el correspondiente período abarcaba desde tres meses hasta 30 años. Los períodos más frecuentes indicados fueron tres, seis y 10 años. En un caso, el plazo se establecía en función del período con anterioridad al cual no podía pedirse la ejecución, a saber, el vencimiento del período para la anulación de la sentencia. Un Estado indicó que la ejecución del laudo se podía pedir incluso después de vencido el plazo, previa autorización del tribunal. El período de prescripción se contaba a partir de la fecha en que había sido dictada la sentencia o la fecha en que la sentencia podía ejecutarse o surtía efecto. En otras respuestas se aludía a la fecha en que el derecho era exigible o se contaba el plazo a partir de la fecha de incumplimiento de la sentencia por primera vez.

9. La mayoría de las respuestas señalaban que el plazo para la ejecución era aplicable independientemente del tipo de demanda, pero con algunas excepciones. En un caso se observó que la prescripción general se aplicaba por analogía a una demanda confirmada por una decisión judicial aunque la demanda en sí fuese objeto de una prescripción más corta. Otra respuesta indicó un plazo específico aplicable a los créditos que no habían llegado a su vencimiento. En unas pocas respuestas se indicó que se aplicaban plazos diferentes en función de que el demandante fuese una persona jurídica o una persona física o de que el acuerdo de arbitraje no se hubiera hecho público. En varias respuestas se señaló asimismo que el plazo dependía de la ley que fuese aplicable.

10. La Comisión tal vez considere oportuno determinar la conveniencia de prestar asistencia para alcanzar una mayor uniformidad entre los Estados Contratantes con

respecto a los plazos para pedir el reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas conforme a la Convención.

b. Procedimientos y requisitos aplicables a una petición de ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención

11. Se solicitó a los Estados que describiesen los procedimientos o requisitos aplicables a una petición de ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención. Se solicitó asimismo a los Estados que proporcionasen información sobre el grado de detalle del procedimiento aplicable a una ejecución de conformidad con cualesquiera disposiciones legislativas, normas procesales o reglamentos.

12. En varias respuestas se indicó que los procedimientos y requisitos aplicables a una solicitud de ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención se limitaban a los establecidos en los artículos IV y V de la Convención. Varias respuestas indicaron que prevalecían las disposiciones de la Convención o que, a falta de una reglamentación expresa en la legislación nacional, se aplicaban únicamente las disposiciones de la Convención. En una respuesta se observó que las normas procesales generales aplicables a la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras no eran incompatibles con la Convención y su objeto era dar una orientación general sobre el procedimiento, a los demandantes y el tribunal. Otro Estado respondió que el demandante podía escoger la ejecución de la sentencia de conformidad con las disposiciones de la Convención o con las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional.

13. Varias respuestas indicaron que a las cuestiones procesales a las que no hacía referencia la Convención se aplicaban las disposiciones generales relativas a la ejecución de los fallos judiciales extranjeros, ya sea en forma expresa o por analogía. Varias respuestas se refirieron a otros tratados relativos a la ejecución. Por ejemplo, en un caso, se indicó que cuando el asunto objeto de la sentencia pertenecía al ámbito del Convenio de Bruselas de 1968 sobre reconocimiento de sentencias extranjeras, la ejecución de la sentencia era objeto de los mismos procedimientos y condiciones que esas resoluciones¹.

14. En algunas respuestas se indicó que una solicitud de ejecución debía satisfacer varios requisitos que no estaban contemplados en la Convención. Diversos Estados indicaron que la parte reclamante debía presentar pruebas de que la sentencia era definitiva o de que el tribunal del Estado en que se había dictado la sentencia había confirmado que era ejecutable y no era recurrible, o en otro caso, que era “ejecutable” en el país en que había sido dictada. Otra respuesta señaló que una petición debía contener una declaración de que la sentencia “no era incompatible con la ejecución”. Podría discutirse el hecho de que algunos de esos requisitos podrían redundar en la negación de los principales logros de la Convención sobre la eliminación del doble exequátur.

15. Varias respuestas indicaron que la parte que pedía la ejecución debía demostrar que se había notificado debidamente a la parte contraria del proceso arbitral, que esta última había sido declarada en rebeldía de conformidad con la legislación del

¹ El Convenio de Bruselas de 1968 sobre reconocimiento de sentencias extranjeras, era el texto aplicable en el momento en que ese Estado había enviado su respuesta.

lugar en que se había dictado la sentencia y había sido debidamente notificada. En algunos casos, el demandante debía certificar la suma adeudada conforme a la sentencia o indicar en qué medida debía ejecutarse la sentencia.

16. En una respuesta se informó de que la demanda debía contener una indicación de todas las prórrogas concedidas por escrito durante el proceso arbitral antes de dictarse la sentencia. Se indicó en una respuesta que el tribunal competente se reservaba el derecho de solicitar información adicional, y en otra respuesta se comunicó que también debían presentarse las "actas de las sesiones" de los procesos arbitrales. En un caso, se exigía un certificado de que las partes no habían expresado objeción alguna a la composición del órgano arbitral si ello no se había indicado expresamente en la sentencia arbitral propiamente dicha. Según varias respuestas, el requisito aplicable en los casos de arbitrajes nacionales de que el tribunal formalizara la sentencia, se aplicaba también a las sentencias extranjeras.

c. Objeciones a la petición de ejecución

17. El cuestionario contenía varias preguntas sobre las tres etapas procesales básicas de la ejecución judicial de la sentencia arbitral extranjera: las objeciones a la petición de ejecución, la apelación contra la denegación de la ejecución y la apelación contra la ejecución de una sentencia dictada en virtud de la Convención. La Convención ofrece una orientación limitada pero esencial sobre esas etapas, principalmente proporcionando los motivos exclusivos para denegar el reconocimiento y la ejecución establecidos en el artículo V.

18. Las respuestas indican que, en general, el procedimiento de ejecución se establece en el código de procedimiento civil o en un instrumento legislativo similar relativo a los fallos judiciales y sentencias extranjeros, y en muchos menos casos se define en la legislación de aplicación de la Convención.

19. Los procesos de ejecución comunicados eran ya sea juicios sumarios ex parte sin la participación de la otra parte, ya, juicios contradictorios en que la otra parte podía invocar inmediatamente los motivos para la denegación de la ejecución contenidos en el artículo V de la Convención o en la legislación nacional aplicable. Varias respuestas indicaron que el tribunal disponía de un plazo para entender a la parte contraria (10 días) o para dictar un fallo judicial (30 días a partir de la fecha de la audiencia final). Un Estado informó de que el demandante debía revelar cualquier objeción a la ejecución de que tuviese conocimiento. En un caso, la ejecución se concedía simplemente mediante la aprobación de la sentencia sin exposición de motivos. Otro Estado comunicó que si la ejecución no se podía decidir sobre la base de la documentación y la información disponibles en el procedimiento simplificado, podría someterse el asunto a una instancia judicial ordinaria.

20. Varias respuestas contenían información sobre los motivos en que podía basarse un tribunal para denegar la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención, que se apartaban, en algunos casos, del texto del artículo V de la Convención. Por ejemplo, se indicaron los siguientes motivos para denegar la ejecución: actuación indebida del árbitro en el proceso, sentencia dictada de forma inapropiada, sentencia dictada por personas que no reunían las condiciones para ser árbitros o tribunal de arbitraje integrado por un número "erróneo" de árbitros. Un Estado indicó que su código de procedimiento civil disponía condiciones para la ejecución de las sentencias y que no quedaba claro si las condiciones contenidas en

un texto y otro debían reunirse o si el régimen de la Convención era el único aplicable para la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. En un caso, se señaló que también podían invocarse para oponerse a la sentencia los motivos para anularla, si bien prevalecía la opinión de no aplicarlos si contravenían la Convención.

21. Un Estado informó de que, además de los motivos para denegar la ejecución de la sentencia dictada conforme a la Convención, contenidos en el párrafo 2 del artículo V, su ley de arbitraje disponía que el tribunal podía denegar la ejecución si constataba que la sentencia había sido dictada como consecuencia de un acto de fraude, corrupción o impostura. Según una respuesta para ejecutar una sentencia debía demostrarse que la demanda objeto de la sentencia no pertenecía a la jurisdicción exclusiva de los tribunales y que no había en curso ningún juicio, ni existía un fallo definitivo de los tribunales con efecto de *res judicata* en la sentencia extranjera.

22. Un Estado respondió que, además de las disposiciones de la Convención, su ley sobre sentencias extranjeras denegaba el reconocimiento si: i) la extralimitación en la competencia hacía que la sentencia no surtiese efecto en el Estado en que se había dictado o de conformidad con la legislación aplicada; y ii) la parte que formulaba la objeción probaba que a causa de la constitución indebida del tribunal arbitral o de un proceso arbitral indebido la sentencia no tenía efecto en el país en que había sido dictada o con arreglo a la legislación aplicada.

23. Otros Estados informaron de que era más reducido el número de motivos para denegar la ejecución, en la ley sobre arbitraje que en la Convención. Un Estado indicó que las condiciones para obtener la ejecución se limitaban a la existencia de una sentencia arbitral que no debía ser incompatible con la política pública internacional. Un Estado comunicó que su legislación sólo disponía de los tres motivos siguientes para denegar la ejecución: a) que no contraviniera un fallo anterior de un tribunal estatal sobre el asunto objeto de la controversia, b) que no infringiese la política pública en ese Estado, y c) que se notificara debidamente a la parte contraria.

24. Varias respuestas reiteraban el principio de que el proceso de ejecución no admitía una revisión sustantiva de la sentencia en cuanto al fondo.

d. Apelación contra la concesión o denegación de la ejecución

25. En muchos casos, se comunicó que la ejecución debía pedirse en el tribunal de primera instancia y que se podía apelar contra la denegación o la concesión de la ejecución ante el tribunal de apelaciones y, después, ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. En varios casos, se indicó también que el tribunal de apelaciones había devuelto el asunto al tribunal inferior que había fallado la apelación o que la apelación sólo se admitía si se excluía una petición para entablar un nuevo juicio.

26. Cuando se podía conceder la ejecución mediante un juicio sumario, la parte contraria podía apelar, ya sea ante el mismo tribunal o un tribunal superior, para anular la orden de ejecución, generalmente dentro de un plazo breve de cinco a catorce días.

27. En varios casos, la ejecución debía pedirse inmediatamente al Tribunal Supremo o a una instancia judicial superior, que admitiera una sola instancia y ninguna apelación adicional.

28. Los plazos para interponer los recursos de apelación eran relativamente cortos, comprendidos entre cinco días y un mes. En un caso, el Tribunal Supremo debía pronunciarse dentro del plazo de noventa días.

29. En varias respuestas se informaba de que era preciso obtener la autorización de apelar, ya sea del tribunal de primera instancia o del propio tribunal de apelaciones, para poder interponer un recurso de apelación. En un caso, para conceder la autorización de apelar el tribunal debía tener el convencimiento de que la confirmación de la decisión del tribunal de primera instancia redundaría en una injusticia grave. Otra respuesta indicó que la apelación debía sustentarse en un error judicial que viciara la decisión recurrida. En algunos casos eran limitados los motivos para interponer una apelación ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si se trataba de un abuso grave de la facultad discrecional, un acto no perteneciente a la jurisdicción del árbitro, la violación de una disposición constitucional, una demanda sobre una cuestión de derecho, una cuestión jurídica general, o en ausencia de cualquier otra acción judicial correctiva. La apelación interpuesta ante el Tribunal Supremo podía también admitirse sólo si el derecho objeto de la demanda tenía un valor superior a una determinada cuantía.

30. Se tomó nota de varios mecanismos favorables a la ejecución. Algunas respuestas indicaron que no podía apelarse contra una decisión que concediese la ejecución, y que sólo podía apelarse contra una decisión que denegase la ejecución. Conforme a indagaciones adicionales, en un Estado, si el tribunal de primera instancia -cuyo fallo era definitivo y no admitía apelación- tenía la intención de denegar la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención, en primer lugar debía permitir que su fallo preliminar fuese examinado por un tribunal superior y en última instancia por el Tribunal Supremo, y después, debía acatar lo propuesto sobre el fallo por esos tribunales.

31. El cuestionario invitaba asimismo a los Estados a facilitar información para determinar si el hecho de interponer una acción de apelación u otros recursos suspendía automáticamente la ejecución de la sentencia o si, mediante petición, el tribunal podía ordenarla. En varios casos, se observó que la ejecución de una sentencia se había suspendido durante el período en que la parte contra la cual debía ejecutarse podía pedir la anulación de la orden de ejecución, así como también durante el consiguiente proceso hasta su conclusión definitiva. En general, la mayoría de las respuestas indicaron que las partes podían solicitar la suspensión y el tribunal la concedería, pero sin efecto automático.

32. Las respuestas reflejaban la diversidad de los procesos de ejecución y sus fuentes jurídicas. También reflejaban que en algunos casos no se habían observado con rigor las restricciones establecidas en la Convención respecto del procedimiento de ejecución de no imponer condiciones significativamente más estrictas que las que regulaban las sentencias nacionales ni de introducir nuevos motivos para la denegación. El legislador podía haber introducido modificaciones en la ley de aplicación o, por el contrario, al no prescribir un procedimiento especial para la ejecución de las sentencias dictadas conforme a la Convención podía, por ejemplo, haber admitido la aplicación del procedimiento de ejecución de las sentencias

nacionales a los fallos extranjeros. La encuesta mostró asimismo que la legislación relativa a los diversos aspectos del reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras figuraba en varios textos legislativos. Sólo si los especialistas en la materia hacían amplias investigaciones podría obtenerse una información completa y precisa sobre los requisitos y el procedimiento de aplicación de la Convención. La Comisión tal vez considere oportuno determinar la conveniencia de prestar asistencia para unificar los procedimientos, en consonancia con las condiciones establecidas en la Convención.

V. Recomendaciones y conclusiones

33. En las respuestas al cuestionario sobre cómo se había aplicado la Convención, aparecían reflejados los diversos ordenamientos jurídicos del mundo. La aplicación de reglas de procedimiento nacionales a cuestiones sobre las que no hacía referencia la Convención de Nueva York proponían soluciones diferentes, en cuanto a los requisitos aplicables a una petición de ejecución, los derechos, gravámenes, tasas o impuestos pagaderos en relación con esa aplicación, la rectificación de las deficiencias de las peticiones, el plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución y los procedimientos, y los tribunales competentes para recurrir una decisión que denegara la ejecución de una sentencia arbitral. Diversas leyes de aplicación tienen disposiciones relativas a muchos más aspectos del procedimiento de ejecución. Las recomendaciones y las conclusiones *infra* sólo se refieren a las cuestiones abordadas en las respuestas al cuestionario. Cabe también tomar nota de que algunos Estados adoptaron un enfoque más liberal del reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, en comparación con las condiciones establecidas en la Convención de Nueva York. En consecuencia, sería preciso, como complemento de esta encuesta, estudiar más a fondo la aplicación por los Estados del artículo VII de Convención de Nueva York.

34. La Comisión quizás desee determinar si la secretaría debería estudiar la viabilidad de preparar una guía para la aplicación legislativa de la Convención que limite el riesgo de que las prácticas adoptadas por los Estados se aparten del espíritu de la Convención de Nueva York. Tal vez fuera preciso que en esa guía se incluyera información sobre la interpretación de la Convención, que tuviese por finalidad ayudar a los Estados a aplicar la Convención, y en particular a esclarecer determinados aspectos poco claros destacados a continuación.

Método de incorporación

35. Con respecto a la primera pregunta sobre la incorporación de la Convención de Nueva York a los ordenamientos jurídicos nacionales, la encuesta reveló en unos pocos casos la existencia de discrepancias, sobre todo entre las obligaciones contraídas por un Estado en el plano internacional en virtud de la ratificación de la Convención, y el efecto jurídico de esas obligaciones en el ordenamiento jurídico interno. Muy pocos Estados, pese a haber ratificado la Convención, no adoptaron la legislación nacional necesaria y, por ende, según informan los Estados, los tribunales nacionales no aplican la Convención. En cuanto a los Estados que han promulgado leyes que parafrasean la Convención de Nueva York, las discrepancias entre los textos pueden obstaculizar la uniformidad de la interpretación y la aplicación de la Convención de Nueva York. En algunos casos en que por la misma

ley que se aplica la Convención se regula el arbitraje, pueden no discernirse claramente las disposiciones de la ley cuyo objeto es aplicar la Convención. Tal vez esa legislación deba aclarar qué disposiciones tienen por objeto aplicar las disposiciones de la Convención y qué disposiciones han sido reemplazadas por la legislación sobre el arbitraje. Asimismo, en el caso de los Estados que hayan proporcionado una traducción de la Convención, puede ser útil determinar la versión que da fe en caso de discrepancia. Hubo Estados que comunicaron fechas de entrada en vigor de la Convención en su ordenamiento jurídico, diferentes de la fecha de entrada en vigor a nivel internacional, lo que podría requerir una labor adicional al respecto.

Reservas

36. Según indicaron algunos Estados las reservas no se reflejan forzosamente en la legislación ni en ningún otro lugar. Los Estados afirmaron que los tribunales se referirían no obstante a esas reservas sin justificar el fundamento para hacerlo. Esto tuvo posibles efectos negativos en la labor de armonización de la Convención de Nueva York. Si los Estados Contratantes deciden formular reservas, éstas deben notificarse debidamente al depositarse el instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, y de consignarse en la legislación correspondiente. También debe aparecer reflejada cualquier declaración ulterior relativa a una reserva o al retiro de la misma.

37. La encuesta no permitió reunir información adicional sobre cómo se aplicaba en la práctica la reserva de reciprocidad (por ejemplo, cómo se identificaba a un “Estado Contratante”). Algunos Estados, en los que el common law es tradicional, indicaron que la inclusión de un determinado Estado en una lista oficial bastaba para probar que ese Estado fuera considerado un “Estado Contratante”, sin aclarar si esas listas eran exclusivas y sin explicar de qué forma, en la práctica, debía demostrarse la reciprocidad a satisfacción de los tribunales del Estado de que se trataba. Como el número de Estados que se adhieren a la Convención es cada vez mayor, se ha reducido el efecto de la reserva de reciprocidad. En ese contexto, se podría recomendar a los Estados que se atuviesen a los términos amplios en que está redactado el comienzo del párrafo 1 del artículo I de la Convención, recogidos asimismo en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Arbitraje, y admitieran el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales independientemente del lugar en que se dicten.

38. Con respecto a la reserva comercial, la encuesta dejó claramente establecido que las discrepancias de aplicación a su respecto podían atribuirse al hecho de que no se había proporcionado una definición armonizada del término “comercial”.

39. En el cuestionario no se preguntó a los Estados si habían, no obstante, utilizado otras reservas que no figuraban en la Convención de Nueva York. Por ejemplo, en algunos casos, ya sea en disposiciones legislativas especiales o en la aplicación práctica, cuestiones como la nacionalidad de las partes, el lugar del arbitraje, el lugar en que se halla una de las partes, podrían afectar el ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York.

Aplicación del artículo III de la Convención

40. En general, las respuestas al cuestionario confirmaron que, salvo escasas excepciones, los Estados Contratantes no habían impuesto honorarios o costas más elevados al reconocimiento o la ejecución de las sentencias dictadas conforme a la Convención que a las sentencias nacionales.

Aplicación del artículo IV de la Convención

41. Las respuestas al cuestionario mostraron que el requisito de presentar, junto con la demanda, el original debidamente autenticado de la sentencia, o una copia de ese original, que reuniese las condiciones requeridas para su autenticidad, o el original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reuniese las condiciones requeridas para su autenticidad, había dado lugar a numerosas interpretaciones y propuestas relativas a la ley pertinente para el cumplimiento de esos requisitos. Muchas respuestas indicaron directa o indirectamente que los requisitos en cuestión no se aplicaban estrictamente. La Comisión quizás considere oportuno determinar si convendría prestar asistencia para evitar la incertidumbre resultante de esa disparidad.

42. Cabe tomar nota de que la frase "junto con la demanda" ya no parecía representar un obstáculo en la práctica y que existía una tendencia general favorable a conceder a las partes la oportunidad de subsanar las deficiencias de la aplicación.

Competencia de los tribunales nacionales

43. En las respuestas relativas al tribunal competente en materia de reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras se expusieron diferentes posibilidades. La posibilidad de elegir entre diferentes lugares, como el domicilio o la residencia del demandado o el lugar en que se hallaban los bienes, podían agilizar el proceso, mientras que un único foro centralizado podía concentrar las competencias en materia de aplicación de la Convención. Todas esas variantes parecían ser igualmente ventajosas. Cabe tomar nota de que varios Estados informaron de que habían adoptado una regla para favorecer la aplicación que admitía interponer un recurso de apelación contra una decisión que denegase la ejecución de la sentencia, pero no recurrir la decisión de ejecución de la sentencia.

Plazo para pedir la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención

44. La Comisión quizás desee determinar si sería conveniente prestar una asistencia encaminada a alcanzar un mayor grado de uniformidad entre los Estados Contratantes con respecto a los plazos para pedir la ejecución de las sentencias dictadas conforme a la Convención. En las respuestas al cuestionario se puso de manifiesto que en numerosos Estados no existía un plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención. Podría ser aceptable que no se dispusiera un plazo. En cambio, si tenía que definirse un plazo, éste debería ser lo suficientemente prolongado para tener en cuenta la posibilidad de que al cabo de procesos de aplicación prolongados e infructuosos, una parte tuviese que pedir la ejecución en otro foro competente. Una interrogante, no abordada en el cuestionario, consiste en saber si la legislación sobre la aplicación preveía un plazo para invocar un acuerdo de arbitraje. Según investigaciones ulteriores, varias disposiciones legislativas de aplicación de la Convención

establecían plazos, conforme al modelo propuesto en el artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Arbitraje².

Procedimientos de ejecución

45. En las respuestas se reflejan diversos procedimientos para oponerse a la ejecución, apelar contra la denegación de la ejecución o conceder la ejecución. La serie de procedimientos descritos en las respuestas, en algunos casos facilitan el procedimiento de ejecución al hacer menos estrictos los requisitos de la Convención y, en otros, promueven un procedimiento más pesado al prescribir requisitos más estrictos. Una orientación al respecto podría ser de utilidad para los Estados. En cuanto a la importante cuestión de saber si los Estados parte en la Convención de Nueva York han incluido requisitos adicionales en su legislación de aplicación sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales, no previstos en el artículo V de la Convención de Nueva York, se observará que algunos Estados informaron de que habían adoptado motivos adicionales, o que se planteaban incertidumbres en cuanto a determinar si los motivos para denegar la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales, eran aplicables a la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.

² De conformidad con el artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Arbitraje, titulado “Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal”:

“1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.”

Anexo

Plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Albania	El plazo para solicitar el reconocimiento y la ejecución se define en función del tipo de demanda que es objeto de la sentencia.
Alemania	No existe un plazo.
Arabia Saudita	No existe un plazo.
Argelia	No existe un plazo específico.
Argentina	Como no existe una norma especial de prescripción, se aplica el período de prescripción general de 10 años para las obligaciones contractuales (art. 4023 del Código Civil).
Armenia	La norma usual de prescripción en las causas civiles es de tres años (art. 332, Código Civil RA).
Australia	El plazo de prescripción se cuenta a partir de la fecha en que se produjo el hecho que en primer lugar motivó la acción interpuesta por el demandante o por una persona que actúa en su nombre, es de 12 años si la sentencia se dicta en virtud de un acuerdo de arbitraje y ese acuerdo se hace mediante escritura; en cualquier otro caso, el plazo es de seis años.
Austria	30 años, independientemente del tipo de demanda objeto de la sentencia
Bahrein	No existe un plazo.
Barbados	El plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención se rige por lo dispuesto en el artículo 45 del capítulo 231 de la Ley sobre la Prescripción de Acciones, a saber, que ninguna acción podrá interponerse contra ningún fallo después de transcurridos seis años a partir de la fecha en que el fallo es ejecutable. Este período es el mismo para cualquier sentencia o una sentencia dictada en virtud de la Convención y no es pertinente el tipo de demanda incorporado en la sentencia. En el artículo 56 del capítulo 231 de la Ley de Prescripción de Acciones se establece que la ley de que se trata se aplica a los arbitrajes al igual que a las acciones sometidas al Tribunal Superior.
Belarús	El plazo es de tres años para cualquier sentencia arbitral extranjera (en general, un año para una sentencia nacional).
Bélgica	No existe un plazo.
Bolivia	No existe un plazo.
Botswana	No existe un plazo.

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Brasil	De conformidad con la norma general consignada en el artículo 205 del Código Civil del Brasil, el derecho de un acreedor prescribe en virtud de la norma de prescripción de 10 años después, ya sea de: i) la fecha de la sentencia o ii) la fecha del reconocimiento de la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, el período de prescripción puede reducirse considerablemente si el objeto de la controversia figura en el artículo 206 del Código Civil del Brasil.
Brunei Darussalam	No existe un plazo.
Bulgaria	No existe un plazo específico. Será aplicable el período general de limitación, a saber, cinco años a partir de la fecha en que haya sido dictada la sentencia. No obstante, el plazo no será aplicado por el tribunal <i>ex officio</i> sino cuando lo solicite la parte contraria.
Camboya	No existe un plazo específico.
Canadá	<p>El artículo 39 1) del Reglamento Procesal Federal establece que, con excepción de lo previsto expresamente en cualquier otra ley, se aplicará la Ley relativa a la prescripción de las acciones en vigor en cualquier provincia a todo procedimiento sometido al Tribunal con respecto a cualquier hecho que de lugar a una acción en la provincia de que se trate.</p> <p>Ontario: Las acciones para la ejecución de una sentencia arbitral se emprenderán dentro de un plazo de seis años a partir del momento en que se produjo la causa de la acción, que presumiblemente será el momento en que la parte perdedora se haya negado a cumplir la sentencia. Las acciones relacionadas con sentencias dimanantes de un acuerdo de arbitraje, que en la legislación de Ontario no se publican, podrán interponerse durante un plazo de 20 años.</p> <p>Quebec: No existe un plazo.</p> <p>Nueva Brunswick: No existe un plazo.</p> <p>Nueva Escocia: No existe un plazo.</p> <p>Isla del Príncipe Eduardo: La norma de la Ley sobre Prescripción (R.S.P.E.I), Capítulo S-7, establece el plazo para poder interponer una acción. Si bien no se menciona especialmente la Convención, a este tipo de acción se aplicará un plazo de seis años.</p> <p>Terranova y Labrador: La Ley sobre Prescripción S.N. 1995, c. L016 establece el plazo durante el cual se puede interponer una acción. No se menciona especialmente la Convención, pero a la ejecución de los fallos extranjeros que comprenden las sentencias arbitrales, se aplica un plazo de seis años.</p>

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
	<p>Yukón: Como no hubo ningún caso pertinente en Yukón no existen normas de procedimiento especiales referidas específicamente a la ejecución de esta Convención. El procedimiento será el establecido conforme al Reglamento Procesal modificado para ajustarse a la acción de que se trate.</p> <p>Territorios del Noroeste: Como no hubo casos pertinentes, no existen normas de procedimiento especiales referidas específicamente a la ejecución de esta Convención. El procedimiento será el establecido conforme al Reglamento Procesal modificado para ajustarse a la acción de que se trate.</p> <p>Columbia Británica: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 3) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y la regla 4 2) del Reglamento Procesal.</p> <p>Alberta: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 2) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.</p> <p>Saskatchewan: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 2) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.</p> <p>Manitoba: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 2) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.</p> <p>Nunavut: No existe un plazo.</p>
Chile	No existe un plazo.
China	Si una de las partes objeto de sentencia es una persona física el plazo será de un año; en los demás casos el plazo será de seis meses.
Chipre	Se aplican las normas usuales de prescripción.
Colombia	El juez podrá determinar un plazo.
Costa Rica	El Código de Procedimiento Civil no establece un plazo para pedir el reconocimiento de ningún tipo de sentencia. No obstante, en la etapa de la ejecución el demandado podrá invocar o invocará cualquier norma de prescripción que pueda afectar los derechos reconocidos en la sentencia. La ejecución tendrá lugar después del reconocimiento por un tribunal civil y conforme a distintos procedimientos y disposiciones.
Croacia	No existe un plazo.
Cuba	No existe un plazo específico. No obstante, el Código Civil de 16 de julio de 1987 (Ley N° 59), en su artículo 116 b del Capítulo II, Términos de Prescripción, establece un período de prescripción de un año para las acciones derivadas de resolución firme, desde la fecha de su firmeza (artículo 120, párrafo 2).

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Dinamarca	La ejecución de una sentencia arbitral podrá desestimarse debido a la prescripción. En cuanto a la disposición legislativa nacional aplicable para determinar la posible prescripción de una sentencia arbitral, se hace referencia al artículo 12 1) de la Orden Ejecutiva N° 117 de 7 de marzo de 1973 (fundamentalmente se aplican los principios del derecho privado internacional). Si esta disposición se aplicara en la legislación danesa con respecto a la cuestión de la prescripción, una sentencia arbitral prescribiría al cabo de 20 años, a menos que la prescripción se haya interrumpido con anterioridad.
Dominica	No existe un plazo.
Ecuador	El juez podrá determinar el plazo.
Egipto	De conformidad con el artículo (58)-1 de la Ley de Arbitraje de Egipto, se aceptará la petición para obtener la ejecución de una sentencia arbitral una vez que haya expirado el plazo establecido para la nulidad.
Eslovaquia	Existe un plazo de 10 años para pedir el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, contado a partir del momento en que la sentencia es definitiva. Se trata de una norma general consignada en el Código Civil.
Eslovenia	No existe un plazo.
España	No existe un plazo específico. El período de prescripción aplicable se define en el artículo 1961 y siguientes del Código Civil.
Estados Unidos de América	En el artículo 207 del Título 9 del <i>United States Code</i> (U.S.C.) (Recopilación de leyes federales de los Estados Unidos) se establece que una petición para la confirmación de una sentencia se presentará dentro del plazo de tres años después de dictada una sentencia arbitral conforme a la Convención. No obstante, una parte que pida la ejecución de una sentencia en el marco de las disposiciones generales de la Ley Federal de Arbitraje deberá presentar su solicitud dentro del plazo de un año a partir del momento en que se haya dictado la sentencia (artículo 9 del Título 9 del U.S.C.). Los tribunales que interpretan que el período de prescripción es de un año divergen con respecto a su facultad de confirmar una sentencia incluso después de expirado el período de un año. Sea como fuere, una parte podrá renunciar expresa o implícitamente al período de prescripción

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Estonia	En el artículo 157 1) de la Parte general de la Ley del Código Civil se establece que el período de prescripción para presentar una demanda reconocida por un fallo judicial en vigor o dimanante de un acuerdo aprobado por un tribunal o de otro documento de ejecución será de 30 años. El período de prescripción se contará a partir de la entrada en vigor del fallo del tribunal o de la publicación del documento de ejecución, pero no antes de que la demanda sea exigible.
Ex República Yugoslava de Macedonia	La parte presentará la petición antes del vencimiento del plazo de 10 años contado a partir de la fecha de entrada en vigor de la sentencia arbitral.
Federación de Rusia	<p>De conformidad con la Ley ejecutiva de procedimiento de 21 de julio de 1997, se podrá pedir la ejecución de los fallos de un tribunal dictados sobre la base de las normas de arbitraje comercial internacional o las decisiones de otros tribunales de arbitraje, dentro del plazo de seis meses contado a partir del día de entrada en vigor del auto o una vez vencido el plazo establecido para diferir la ejecución o ejecución parcial, y en los casos en que el auto sea objeto de una aplicación inmediata, un día después de haber sido dictado (artículo 14).</p> <p>El Código de Procedimiento Civil de la Federación de Rusia (artículo 437) dispone que podrá pedirse la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras dentro del plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de la sentencia. Esta disposición no ha sido revocada formalmente. Por consiguiente, en vista de que en el párrafo 2 del artículo 80 de la Ley ejecutiva de procedimiento, que prevé plazos para pedir la ejecución de fallos de tribunales extranjeros, no se hace referencia a las sentencias arbitrales extranjeras, cabe suponer que seguirá siendo aplicable a las sentencias arbitrales extranjeras el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal.</p> <p>No obstante, podrá considerarse aplicable el artículo 14 de la Ley ejecutiva de procedimiento mencionado <i>supra</i>, relativo a los plazos para presentar peticiones de órdenes de ejecución, sólo para las sentencias arbitrales comerciales internacionales dictadas en el territorio de la Federación de Rusia.</p>

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Filipinas	El artículo 23 de la Ley de la República N° 876 establece que la petición de confirmación de una sentencia se presentará dentro del plazo de un mes después de haber sido dictada. No hay jurisprudencia sobre la cuestión. Por otra parte, si un tribunal extranjero confirma la sentencia y se ejecuta el fallo del tribunal por el que se confirma la sentencia, el artículo 6 de la regla 39 del Reglamento Procesal establece que un fallo definitivo se podrá ejecutar de oficio dentro del plazo de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, y mediante una acción independiente, en el plazo de 10 años a partir de esa fecha.
Finlandia	No existe un plazo específico.
Francia	No existe un plazo específico.
Georgia	No existe un plazo específico. No obstante, el Tribunal Supremo podrá por analogía referirse al artículo 142.1 del Código Civil, que establece que el período de prescripción respecto de una demanda confirmada por el fallo de un tribunal que haya entrado en vigor es de 10 años, incluso cuando la demanda sea objeto de una prescripción más corta. Este período de 10 años es el mismo para cualquier decisión judicial. Si el Tribunal Supremo recurre a la analogía de la ley, en virtud de la Ley de Georgia sobre procedimientos de ejecución (artículo 34.1.e), el proceso de ejecución terminará si ha expirado el período de prescripción de una demanda confirmado por un fallo judicial.
Ghana	La Ley Procesal de 1963 dispone un período de prescripción de seis años para los fallos extranjeros. No obstante, la Ley de Arbitraje no se pronuncia sobre la cuestión.
Grecia	No existe un plazo.
Guatemala	El párrafo 1 del artículo 48 de la Ley de Arbitraje prevé que para pedir el reconocimiento y la ejecución del laudo, habrá transcurrido el plazo de un mes desde que haya sido dictado el laudo, si no se ha pedido su anulación. Después, el período dependerá del tipo de demanda de que es objeto el laudo. La norma de prescripción generalmente aplicable es un período de cinco años, pero algunas obligaciones están sujetas a períodos más cortos.
Honduras	Ni la Ley de Arbitraje ni la Ley de Procedimiento Civil establecen un plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención. No obstante, por analogía, serán aplicables los períodos de prescripción establecidos en el Código de Comercio. Los períodos de prescripción del Código de Comercio son de seis meses a dos años según la naturaleza de la demanda.

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Hungria	El período de prescripción para la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención es el mismo que para la prescripción de la demanda incorporada en esa sentencia (artículo 57 de la Ley de ejecución judicial).
India	La sentencia debe someterse a los tribunales de la India dentro del plazo de tres años y el período de prescripción no depende del tipo de demanda.
Indonesia	La Ley de Arbitraje no impone ningún plazo para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales internacionales. No obstante, existe un plazo de prescripción de 30 días sólo para la inscripción de una sentencia nacional.
Irán (República Islámica del)	No existe un plazo.
Irlanda	Los plazos para la ejecución de las sentencias arbitrales están consignados en la Ley de Prescripción de 1957, que prevé: a) que no podrá interponerse una acción de ejecución antes de transcurridos seis años a partir de la fecha en que se haya producido el hecho que dio lugar a la causa de la demanda, si no se ha publicado el acuerdo de arbitraje o si el arbitraje se ha efectuado en virtud de cualquier ley que no sea la Ley de Arbitraje de 1954; y b) que no se podrá interponer una acción para la ejecución de una sentencia después de transcurridos 12 años a partir de la fecha en que haya tenido lugar la causa de la demanda si el acuerdo de arbitraje no ha sido publicado.
Israel	Para la ejecución de las sentencias, dictadas conforme a la Convención o de otra forma, se aplica un procedimiento de “confirmación”. No existe un plazo para someter una petición de confirmación al tribunal.
Italia	No existe un plazo.
Jamaica	No existe un plazo de prescripción para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención. No obstante, un fallo del Tribunal no podrá ejecutarse después de transcurridos seis años sin autorización del Tribunal, regla que también se aplica a todas las sentencias nacionales y a las dictadas en virtud de la Convención.
Japón	No existe un plazo.
Jordania	Sólo está sujeto a las prescripciones prolongadas de renuncia, al igual que las decisiones judiciales.
Kazajstán	El Código de Procedimiento Civil de Kazajstán prevé un período de tres años para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal extranjero. Este período no depende del tipo de demanda de que es objeto la sentencia.

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Kenya	La Ley de Arbitraje no prevé un período de prescripción para la ejecución de ninguna sentencia. En el artículo 4 1) c) de la Ley de Prescripción de las Acciones [Cap. 22 de la Legislación de Kenya] se prevé un plazo de seis años para la ejecución de una sentencia.
Kirguistán	Existe un plazo limitado de tres años de conformidad con el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil.
Kuwait	No existe un plazo de conformidad con la legislación de Kuwait para pedir la ejecución de una sentencia arbitral extranjera. El derecho de una parte de pedir la ejecución de una sentencia prescribirá después de transcurrido un período de prescripción de 15 años.
Letonia	En el párrafo 2 del artículo 636 del Código de Procedimiento Civil se establece que el plazo para presentar una petición de reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral es de tres años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la sentencia, a menos que en los tratados internacionales se estipule otro plazo. Este plazo se aplica a cualquier sentencia dictada conforme a la Convención y no depende del tipo de demanda incorporada en la sentencia.
Líbano	No existe un plazo específico. Se aplica la legislación general sobre prescripción.
Lituania	De conformidad con el artículo 387 del Código de Procedimiento Civil, la decisión del Tribunal de Apelaciones de reconocer y ejecutar la sentencia dictada conforme a la Convención se presentará para su ejecución dentro del plazo de tres años a partir de la fecha en que se haya dictado. El período para pedir la ejecución no depende del tipo de demanda de que sea objeto la sentencia, ni del tipo de sentencia.
Luxemburgo	No existe un plazo.
Madagascar	El período de prescripción es de cinco años de conformidad con los textos malgaches sobre asuntos comerciales.
Malasia	El artículo 6 1) c) de la Ley de Prescripción de 1953 (Ley 254) establece que no se interpondrá una acción para obtener la ejecución de una sentencia después de vencido el plazo de seis años contado a partir de la fecha en que se produjo el hecho que dio lugar a la acción. El artículo 30 1) de la Ley de Prescripción de 1953 (Ley 254) dispone que la presente ley, y cualquier otra ley escrita relativa a la prescripción de acciones, se aplicará a las sentencias arbitrales al igual que se aplica a las acciones.
Malta	No existe un plazo.

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Marruecos	No existe un plazo para las sentencias arbitrales extranjeras. Se aplica un período de prescripción de tres días a partir de la fecha de la publicación de la sentencia para el reconocimiento de las sentencias arbitrales nacionales.
Mauricio	El Código Civil dispone distintos períodos de prescripción en función de la naturaleza de la medida.
México	No existe un plazo específico. Si el período de prescripción aplicable a los procesos comerciales para la ejecución de los fallos también se aplicara a las sentencias extranjeras, el plazo pertinente sería de 10 años contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia a las partes.
Mónaco	El artículo 477 del Código de Procedimiento Civil enuncia el principio según el cual se interpondrán las peticiones de ejecución de los fallos y los instrumentos extranjeros y se fallará a su respecto conforme a los procedimientos normales. Se aplicará el artículo 972 del Código de Procedimiento Civil respecto de los períodos de prescripción.
Mongolia	La petición de ejecución deberá presentarse dentro de un plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya dictado la sentencia arbitral.
Mozambique	De conformidad con el artículo 309 del Código Civil de Mozambique, la norma general para la prescripción de las deudas y demandas conexas es 20 años. No obstante, podrán aplicarse períodos de prescripción más cortos (por ejemplo, cinco años, dos años o seis meses) a determinados tipos de demandas (como asignaciones o rentas periódicas, deudas a restaurantes y hoteles en concepto de alimentos y/o alojamiento, deudas a los hospitales en concepto de atención médica, deudas a las escuelas por la enseñanza impartida, deudas a los abogados por la asistencia letrada, deudas a los comerciantes en general, etc.). De conformidad con el artículo 311 del Código Civil, será aplicable un período de prescripción de 20 años a todas las demandas incorporadas en las sentencias. La única excepción a esta regla se plantea cuando una sentencia concede a la parte vencedora un crédito que no ha llegado a su vencimiento. En este caso, la norma de prescripción aplicable a ese crédito es la que se aplicaría si no estuviese incorporado en una sentencia.
Nepal	El plazo es de 90 días para las sentencias dictadas conforme a la Convención, contados a partir de la fecha en que haya sido dictada, mientras que a las sentencias nacionales se aplica un plazo de 75 días contado a partir de la fecha de recepción de la copia del laudo.

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Nigeria	El plazo es de tres meses contados a partir de la fecha de la publicación de la sentencia, independientemente de que se trate de una sentencia dictada conforme a la Convención, y no depende del tipo de demanda.
Noruega	Si no se pide la ejecución dentro del plazo de un año después de disponerse del derecho a obtener la ejecución, podrá no darse curso a la petición (Ley relativa a la ejecución de acciones civiles, artículos 4 a 19). De otra forma, la Ley relativa a la prescripción de créditos monetarios y otras acciones de 18 de mayo de 1979 N° 18, art. 21 2), prevé que una demanda afirmada en una sentencia arbitral prescribe al cabo de 10 años contados a partir de la fecha en que se haya dictado la sentencia arbitral, o de la fecha en que el acreedor podía haber reclamado la ejecución. El período es el mismo para las sentencias dictadas conforme a la Convención y las demás sentencias, y se aplica a todos los tipos de demandas.
Nueva Zelandia	El artículo 34 3) del Primer Anexo de la Ley de Arbitraje de 1996 establece que una petición de nulidad de una sentencia no podrá presentarse después de transcurridos tres meses de la fecha en que la parte solicitante había recibido la sentencia, o si se ha formulado una petición en virtud del artículo 33, a partir de la fecha en que ésta obra en poder del Tribunal Arbitral. Esto no es aplicable a una petición de nulidad invocando como motivo una sentencia afectada o inducida por fraude o corrupción. Esto se aplica a todas las sentencias, incluidas las dictadas conforme a la Convención.
Omán	No existe un plazo específico. Son aplicables las disposiciones del Código Civil.
Paraguay	La duración del período de prescripción aplicable a la ejecución de las sentencias es de 10 años.
Perú	No existe un plazo específico. No obstante, el período de prescripción suele ser de 10 años con arreglo al Código Civil.
Polonia	No existe un plazo específico.
Portugal	No existe un plazo específico. De conformidad con el artículo 309 del Código Civil, la norma general para la prescripción de las deudas y demandas conexas es 20 años. No obstante, podrán aplicarse períodos de prescripción más cortos (por ejemplo, cinco años, dos años o seis meses) a determinados tipos de demandas (como asignaciones o rentas periódicas, deudas a restaurantes y hoteles en concepto de alimentos y/o alojamiento, deudas a los hospitales en concepto de atención médica, deudas a las escuelas por la enseñanza impartida, deudas a los abogados por la asistencia letrada, deudas a los comerciantes en general, etc.). De conformidad con el artículo 311 del Código Civil, será aplicable un período de prescripción de 20 años a todas las demandas

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Portugal	No existe un plazo específico. De conformidad con el artículo 309 del Código Civil, la norma general para la prescripción de las deudas y demandas conexas es 20 años. No obstante, podrán aplicarse períodos de prescripción más cortos (por ejemplo, cinco años, dos años o seis meses) a determinados tipos de demandas (como asignaciones o rentas periódicas, deudas a restaurantes y hoteles en concepto de alimentos y/o alojamiento, deudas a los hospitales en concepto de atención médica, deudas a las escuelas por la enseñanza impartida, deudas a los abogados por la asistencia letrada, deudas a los comerciantes en general, etc.). De conformidad con el artículo 311 del Código Civil, será aplicable un período de prescripción de 20 años a todas las demandas incorporadas en las sentencias. La única excepción a esta regla se plantea cuando una sentencia concede a la parte vencedora un crédito que no ha llegado a su vencimiento. En este caso, la norma de prescripción aplicable a ese crédito es la que se aplicaría si no estuviese incorporado en una sentencia.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	La petición deberá indicar que la sentencia es ejecutable, lo que significará normalmente que la sentencia no ha sido dictada hace más de seis años. El mismo período se aplica, sea cual fuere el tipo del laudo. Los laudos anteriores exigen un examen especial.
República Árabe Siria	Con sujeción a la condición de reciprocidad, la ley no especifica un plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención. Si la ejecución de la sentencia en cuestión ha prescrito en virtud de la legislación del país en que fue dictada, no podrá ser ejecutada en Siria.
República Checa	No existe un plazo.
República de Corea	No existe un plazo específico. No obstante, en general se acuerda la aplicación de un plazo de 10 años a la demanda definitiva en virtud de una sentencia dictada conforme a la Convención, así como conforme a decisiones judiciales nacionales, de conformidad con el artículo 165 del Código Civil y el artículo 14 de la Ley de Arbitraje.
República Democrática Popular Lao	No existe una norma específica relativa a esta cuestión.
República Unida de Tanzania	-
Rumania	La ejecución de una sentencia arbitral extranjera en Rumania se rige por las normas de prescripción comunes, a saber, tres años contados a partir de la fecha en que la sentencia es definitiva e irrevocable, a menos que la legislación del Estado en que se haya dictado la sentencia disponga una norma de prescripción más corta.
San Marino	No existe un plazo.

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Santa Sede	En la Ciudad del Vaticano la Convención no es objeto de ninguna normativa y no existen precedentes de ejecución de sentencias arbitrales extranjeras.
Serbia	No existe un plazo específico para la ejecución de las sentencias extranjeras. Según lo dispuesto en la Ley sobre contratos y responsabilidad civil, una demanda incorporada en un fallo judicial o en una sentencia es objeto de un período de prescripción de 10 años contado a partir de la fecha en que el fallo o la sentencia sean ejecutables. Si se pide la ejecución después de haber expirado el plazo de prescripción, el deudor podrá objetar que ha expirado ese plazo y el tribunal se negará entonces a fallar y a proceder a la ejecución. No obstante, no se negará a reconocer una sentencia extranjera dictada conforme a la Convención. Una sentencia reconocida que sea objeto de una demanda obsoleta producirá los mismos efectos que cualquier otra obligación en especie.
Singapur	Se deberá interponer una acción que pida la ejecución de una sentencia dentro del plazo de seis años después de dictada [art. 6 1) c), Cap. 163 de la Ley de Prescripción]. Se aplicará el mismo plazo a las sentencias nacionales y a las dictadas conforme a la Convención.
Sri Lanka	Con arreglo al artículo 31 de la Ley de Arbitraje, una parte en un acuerdo de arbitraje en virtud del cual se dicte una sentencia arbitral podrá dentro del plazo de un año, después de cumplidos 14 días de la fecha en que se dictara la sentencia, pedir su ejecución al Tribunal Supremo.
Sudáfrica	La ley en sí no establece ningún plazo específico. Pero la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable determinado en función de las circunstancias del asunto.
Suecia	No existe un plazo.
Suiza	No existe un plazo específico.
Tailandia	El plazo es de un año contado a partir de la fecha en que se da traslado a las partes de la copia de la sentencia.
Trinidad y Tabago	<p>El artículo 3 1) b) de la Ley de Prescripción de ciertas acciones, Cap. 7:09 (“Ley de Prescripción”) prevé que no se podrá interponer una acción para obtener la ejecución de una sentencia de un árbitro dictada en el marco de un acuerdo de arbitraje (que no sea un acuerdo mediante escritura) después de vencido el período de cuatro años contado a partir de la fecha en que se produjo el hecho que dio lugar a la acción.</p> <p>La Ley de Prescripción no proporciona orientación sobre el momento en que se produjo el hecho que dio lugar a la acción; por ejemplo, si se cuenta a partir de la fecha del primer incumplimiento del contrato que contiene el acuerdo de arbitraje o</p>

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
	<p>La Ley de Prescripción no proporciona orientación sobre el momento en que se produjo el hecho que dio lugar a la acción; por ejemplo, si se cuenta a partir de la fecha del primer incumplimiento del contrato que contiene el acuerdo de arbitraje o a partir de la fecha en que el árbitro dicta la sentencia. No existe ningún precepto jurídico nacional al respecto.</p> <p>En ausencia de dicho precepto, es probable que el Tribunal de Trinidad y Tabago se atenga a la orientación del caso inglés de <i>Agromet Motoimport c. Maulden Engineering Co. (Beds.) Ltd.</i> [1985] 1 W.L.R. 762 (copia adjunta).</p> <p>El Tribunal del Reino Unido concluyó que una acción interpuesta para obtener la ejecución de una sentencia arbitral era una acción independiente y que el período de prescripción se contaba a partir de la fecha del incumplimiento por el demandado de la sentencia dictada conforme a la Convención. Sobre esa base, se podrá ejercitar una acción para obtener la aplicación en Trinidad y Tabago de una sentencia dictada conforme a la Convención sobre la base de un acuerdo de arbitraje (que no sea un acuerdo mediante escritura) dentro del plazo de cuatro años a partir de la fecha en que haya sido dictada esa sentencia.</p>
Túnez	No existe un plazo específico. La sentencia objeto de una acción de nulidad ante el Tribunal de Apelación de Túnez, confirmada por ese Tribunal, estará sujeta al plazo general de validez previsto para los fallos judiciales en Túnez (20 años). La sentencia de confirmación en un tribunal extranjero estará sujeta al período de prescripción en vigor en ese país.
Turquía	No existe un plazo.
Uganda	No existe un plazo.
Ucrania	Hay una regla general según la cual, con respecto a las sentencias arbitrales, los tribunales de Ucrania se basan ya sea en los períodos de prescripción aplicables a esas sentencias en los países en que fueron dictadas o en el período de prescripción de tres años.
Uruguay	El Código de Procedimiento, en el capítulo sobre el reconocimiento y la ejecución de fallos extranjeros, no indica un plazo, sino que la norma general que establece es un período de prescripción de 20 años.
Uzbekistán	De conformidad con la legislación, puede pedirse una decisión para la ejecución de una sentencia arbitral o dictada por un tribunal extranjero dentro del plazo de tres años contado a partir de la fecha de la entrada en vigor, independientemente del tipo de demanda o de cualquier otra característica de la sentencia. No obstante, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento aplicable en materia económica,

Nombre del país	¿Existe un plazo límite para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada conforme a la Convención?
Uzbekistán	De conformidad con la legislación, puede pedirse una decisión para la ejecución de una sentencia arbitral o dictada por un tribunal extranjero dentro del plazo de tres años contado a partir de la fecha de la entrada en vigor, independientemente del tipo de demanda o de cualquier otra característica de la sentencia. No obstante, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento aplicable en materia económica, puede pedirse la ejecución de los fallos de los tribunales locales de nivel intermedio dentro del plazo de seis meses contado a partir de la fecha de vencimiento del período de ejecución voluntaria de ese fallo.
Venezuela	No existe un plazo.
Viet Nam	No se menciona en el Decreto ningún plazo.
Zambia	La Ley de Arbitraje no especifica un plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución, ni discierne un laudo de una sentencia dictada conforme a la Convención.
Zimbabwe	La Convención no especifica un plazo para pedir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia.